



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veintitrés de octubre de dos mil veintitrés.**

#### **23-190**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación.  
Demandante: **JULIO CESAR PALACIO CORREA.**  
Demandado: **COLPENSIONES E.I.C.E., y otros.**  
Radicado No.: 05001-31-05-**005-2021-00295-01.**  
Tema: ineficacia traslado  
Decisión: **CONFIRMA Y ADICIONA SENTENCIA.**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto Porvenir S.A., Colfondos S.A. y Skandia S.A. contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado, se reconoce personería jurídica a los siguientes:

- Al doctor MAURICIO LARA GARCIA, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.128.442.661 de Medellín con Tarjeta Profesional No. 273.006 del C.S.J. conforme sustitución de poder que le hiciera la doctora CLAUDIA LILIANA VELA, identificada con c.c. 65.701.747 y TP. 123.148 del C.S. de la J., en calidad de Representante Legal de la sociedad CAL & NAF ABOGADOS S.A.S., persona jurídica que funge como apoderada general de COLPENSIONES E.I.C.E. con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del C.G.P. debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que reposa en el plenario, y de conformidad con la Escritura Publica No. 3.368 del 2 de septiembre de 2019, suscrita en la notaria 9 del círculo de Bogotá.
- Al doctor OCTAVIO ANDRES CASTILLO OCAMPO identificado con c.c. 1.017.267.151 de Medellín y T.P. N 380.131 del C. S. de la J. para representar los intereses de PORVENIR S.A, por estar adscrito a la sociedad GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S., como consta en el certificado de existencia y representación legal allegado, persona jurídica que funge como apoderada judicial de la sociedad PORVENIR S.A. según escritura pública No. 1.281 del 02 de junio de 2023, suscrita en la Notaria 18 del Círculo de Bogotá.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 035** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

## **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

### **1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitó el demandante, se declare la **INEFICACIA** del traslado al RAIS. Que se condene a Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones las cotizaciones junto con los rendimientos causados durante el periodo de afiliación. Que se ordene a Colpensiones a admitirlo como afiliado al RPM y a recibir las cotizaciones y rendimientos. Finalmente solicitó se condene en costas y gastos del juicio.

### **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 28 de septiembre de 1969, por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con 61 años de edad.
- ✓ Que se afilió inicialmente al ISS, hasta el mes de julio de 1997, fecha en la cual se trasladó al RAIS administrado por Horizonte hoy Porvenir S.A.
- ✓ Que efectuó movilidad a las siguientes administradoras del RAIS: en el mes de mayo de 2001 a Protección S.A., en abril de 2005 a Colfondos S.A., en noviembre de 2009 a Old Mutual S.A., y finalmente en julio de 2011 a Porvenir S.A.
- ✓ Que, al momento de la afiliación inicial no se le dio toda la información necesaria para el traslado, pues el asesor comercial se limitó a decir que el traslado era necesario porque el ISS se iba a acabar y por ende se quedaría sin pensión, aunado a que en la AFP se podría pensionar a cualquier edad, y con una pensión mejor.
- ✓ Que solicitó ante Colpensiones el traslado de régimen pensional, entidad que negó tal pretensión mediante comunicado del 8 de marzo de 2021.

### **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Colpensiones E.I.C.E., se opuso a las pretensiones de la demanda; y estimó como ciertos los hechos relativos la fecha de nacimiento del actor, la afiliación al ISS, y la solicitud de traslado incoada. Frente a los demás supuestos de hecho, adujo no constarle al ser exógenos al conocimiento de la entidad.

Porvenir S.A., se opuso a la totalidad de pretensiones; y no aceptó ningún hecho del libelo demandatorio. Frente al traslado de régimen pensional, indicó que se dio en cumplimiento de las obligaciones vigentes para la fecha, efectuándose además la debida asesoría. Resaltó que no hay prueba de la aseveración realizada por el asesor comercial relacionada con la extinción del ISS, por lo que el traslado efectuado goza de plena validez.

Protección S.A., se opuso a la totalidad de pretensiones que la involucraban; y aceptó el hecho relativo a la fecha de nacimiento del accionante. Frente a los demás hechos, indicó que el actor se afilió de manera libre y voluntaria a la Protección el 08 de marzo de 2001, como traslado de la AFP Porvenir, después de recibir de parte de los asesores información clara, correcta, adecuada y suficiente sobre el régimen de ahorro individual y las implicaciones de trasladarse de Administradora, tomando la decisión libremente, sin presión ni fuerza, tal y como quedó demostrado con su firma en el formulario de afiliación

Skandia S.A., se opuso a todas las pretensiones incoadas; y aceptó el hecho relativo a la fecha de nacimiento del accionante. Frente a los demás supuestos facticos, indicó que dicha AFP no fue la entidad al través de la cual se realizó el traslado inicial de régimen pensional, razón por la cual, no era la llamada a informar sobre las consecuencias del traslado, sus ventajas o desventajas. En consecuencia, decidió atenerse a lo probado en el transcurso del proceso.

Colfondos S.A., se opuso a las pretensiones que la involucraban; y no aceptó ningún hecho del libelo demandatorio. Frente a los demás hechos, indicó que relacionan al demandante y a terceros ajenos a dicha entidad, situación que imposibilitan la emisión de una respuesta pues Colfondos no tuvo injerencia en el traslado de régimen del actor.

Finalmente, la llamada en garantía Mapfre S.A., se opuso a las pretensiones de la demanda; y frente a los hechos destacó que no le constan al no tener injerencia o participación en los mismos.

#### **1.4 DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA.**

Mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2023, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia del traslado de JULIO CESAR PALACIO CORREA, identificada con CC No. 71.636.799, del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, por falta de consentimiento informado, lo que derivó error en el asentimiento de la demandante al momento de afiliarse al régimen administrado por la AFP HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A.

SEGUNDO: DECLARAR que la afiliación de JULIO CESAR PALACIO CORREA, identificada con CC No. 71.636.799, al Régimen de Prima Media, no ha tenido solución de continuidad en el tiempo en el que ha estado activamente vinculado al Sistema General de Pensiones.

TERCERO: CONDENAR a la AFP PORVENIR S.A., a que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, traslade con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- el cien por ciento (100%) de los aportes efectuados por la demandante, y cualquier otro valor que se encuentre en su cuenta de ahorro individual, incluidos los frutos y rendimientos financieros que sobre los mismos se hubieren causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, que hubieran sido deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación del demandante a esa administradora, y hasta la fecha en que se haga efectivo el traslado de régimen pensional, valores que deberán ser debidamente indexados, así como, CONDENAR a la AFP PROTECCIÓN, AFP SKANDIA, COLFONDOS P. Y C. Y LA AFP PORVENIR S.A, a que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que quede en firme esta providencia, traslade con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- el cien por ciento (100%) de los frutos y rendimientos financieros que se hubieren causado, asumiendo con cargo a su propio patrimonio los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas previsionales, lo descontado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el Fondo de Solidaridad Pensional, que hubieran sido deducidos desde la fecha en que se hizo efectiva la afiliación de la demandante a esa administradora, y hasta la fecha en que se haga efectivo el traslado de fondo Pensional, valores que deberán ser debidamente indexados, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a COLPENSIONES a recibir los aportes que las AFPs antes mencionadas, le devuelvan, como resultado de la ineficacia decretada, y a tener en cuenta el tiempo cotizado por la demandante en el Régimen de Ahorro Individual, como semanas cotizadas que deberán reflejarse en la historia laboral de éste.

QUINTO: DECLARAR la IMPROSPERIDAD de las excepciones propuestas por los apoderados de las demandadas, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEXTO: CONDENAR en COSTAS a la a cargo de la AFP Protección, AFP Skandia, Colfondos P. y C. y la AFP Porvenir S.A Inclúyase como agencias en derecho a favor de JULIO CESAR PALACIO CORREA, identificada con CC No. 71.636.799, la suma de \$2 a suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.320.000), que equivalen a 2 SMLMV, correspondiendo la suma \$580.000 a cada una. Absolver a Colpensiones del pago de Costas procesales.; así mismo, y la suma de \$1.160.000 que equivale a 1 SMLMV

a cargo de AFP SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y a favor de la llamada en garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

SEPTIMO: CONCEDER el Grado Jurisdiccional de Consulta, de conformidad con lo indicado por la Sala de Decisión Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias No. 51.237 del 04 de diciembre de 2013 y No. 40.200 del 09 de Junio de 2015.”

Dentro del término concedido por la ley, Porvenir S.A., Colfondos S.A. y Skandia S.A. interpusieron recurso de apelación.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR**

La decisión se motivó en el incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras del RAIS, en quienes recaía la carga de acreditar la existencia de una asesoría clara, completa y veraz, lo que no ocurrió, sujetándose para el efecto en las sub-reglas sentadas en la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral.

### **2.2. RECURSOS DE APELACIÓN.**

#### **2.2.1 PRESENTADO POR SKANDIA S.A.**

Solicitó se absuelva a la entidad de todas las pretensiones incoadas en su contra, considerando que la vinculación del actor se dio conforme al contexto normativo vigente, en cumplimiento de los requisitos exigidos para la época, como lo es el formulario de afiliación donde se debía dejar consignada la decisión libre y voluntaria que tomó el demandante. Destacó que la prueba documental exigida por el a quo no era una obligación vigente al momento del traslado, pues su exigibilidad se dio a partir de la emisión de la Circular 016 de 2016, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, aunado a que, la obligación del buen consejo, doble asesoría y la de desincentivar la afiliación, son posteriores a la afiliación pues surgieron en los años 2010 y 2014, y por ende, no se pueden aplicar de forma retroactiva. Destacó que, el actor se trasladó de régimen considerando que era su mejor opción pensional, y prueba de ello es la movilidad efectuada entre varias administradoras del RAIS.

De otro lado, en caso de confirmar la decisión, solicitó que no se ordene el traslado de los gastos de administración, pues la entidad generó buenos rendimientos que incluso superaron los que se generarían en Colpensiones, lo anterior, conforme al concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia No. 2019152159003, en donde se hace alusión a la importancia de respetar las restituciones mutuas en caso de declarar la ineficacia de la afiliación. Frente a las primas de seguro previsional,

solicitó que se ordene a Mapfre S.A. a la devolución de dichos emolumentos, pues es dicha entidad quien recibió el pago por dichos conceptos, teniendo en cuenta que no es posible retrotraer el servicio y la cobertura prestada, aclarando que dicho dinero ya no se encuentra en el patrimonio de la AFP. Frente a la indexación, resaltó que con la devolución de los rendimientos se compensaría la depreciación del poder adquisitivo de la moneda que se hubiese podido generar.

Finalmente, en cuanto a las costas procesales, solicitó se revoque la condena teniendo en cuenta que dicha entidad no ocasionó el traslado de régimen pensional, y además ha obrado de buena fe conforme a la normatividad vigente

### **2.2.2 PRESENTADO POR PORVENIR S.A.**

Solicitó se revoque la providencia de primera instancia, teniendo en cuenta que la afiliación del actor se dio de forma libre y voluntaria, al contar con las herramientas suficientes para tomar una decisión informada. Destacó que el actor en el interrogatorio de parte, realizó confesiones que acreditan el conocimiento suficiente para tomar una decisión libre y voluntaria conforme a la información recibida, pues conocía características propias del RAIS como rendimientos financieros, y las comparaciones pensionales entre ambos regímenes, de esta manera, quedó probado que la única inconformidad del actor es la cuantía de la mesada pensional, más allá de la decisión libre y voluntaria de afiliarse al RAIS, motivo que no se puede considerar suficiente para viciar la voluntad del demandante, más cuando las características de los regímenes no son comparables.

En caso de confirmar la decisión recurrida, solicitó se modifique la decisión en cuanto al pago de gastos de administración y seguros previsionales, pues los primeros tienen una destinación específica, y un mandato legal que fue cumplido por la entidad, aunado a que ya no se encuentran en el patrimonio de la entidad pues se destinaron a cubrir los gastos necesarios para la correcta administración de la cuenta de ahorro individual. En cuanto a la prima de seguro, adujo que no se puede desconocer que dichos conceptos fueron trasladados a una aseguradora, quien brindó la cobertura a las contingencias de invalidez, vejez y muerte, hecho que no es posible retrotraer.

### **2.2.3 PRESENTADO POR COLFONDOS S.A.**

Interpuso recurso de apelación de forma parcial, en contra de la orden de retorno de emolumentos, considerando que el Decreto 2555 de 2010 determina que las cuotas de administración tienen una destinación específica. Destacó que los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, determinan la forma de financiar las pensiones, para lo cual, tratándose de pensión de sobrevivientes, las entidades contratan con terceros como lo son las aseguradoras quienes se encargan de brindar la cobertura

respectiva, razón por la cual, la entidad transfirió y canceló dichos emolumentos para que cumplieran su finalidad, y por ende, estos valores deben considerarse ajenos a Colpensiones

## **2.3 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.**

### **2.3.1 PRESENTADOS POR COLPENSIONES E.I.C.E.**

Resaltó que, el a quo emitió la providencia sin consideración de las implicaciones económicas y administrativas que tiene que asumir la entidad al desplegar una defensa técnica en una relación jurídica sustancial de la cual en principio no hizo parte, pues la administradora no participó en la celebración del contrato de vinculación, ni hizo parte del uso de maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Destacó que la parte actora es una persona plenamente capaz, y bajo sus facultades de forma libre y espontánea suscribió una afiliación considerando que sería más favorable pensionarse con el fondo privado, sin que exista certeza en el plenario que permita tener como cierto lo afirmado en la demanda, razón por la cual, al confirmar la decisión se estaría atentando en contra de la estabilidad financiera de Colpensiones.

En caso de confirmar la providencia, solicitó que se ordene el retorno de los aportes, rendimientos, gastos de administración y cualquier otro rubro recibido en razón a la afiliación que se está declarando ineficaz, lo anterior, de conformidad con las sentencias de la CSJ 1421, SL 1452 y SL 1688 todas del año 2019, en las cuales se indica que no es procedente imponer cargas económicas adicionales a Colpensiones, mas cuando su accionar siempre ha estado revestido de buena fe.

### **2.3.2 PRESENTADOS POR SKANDIA S.A.**

Solicitó se revoque la providencia de primera instancia, considerando que dicha AFP cumplió en todo momento con el deber de información, pues suministró la información suficiente para que el actor tomara una decisión libre y voluntaria. Resaltó que no es posible imponerle la carga de allegar un documento diferente al formulario de afiliación según lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994.

En caso de confirmar la providencia, solicitó se tenga en cuenta que dicha entidad descontó un porcentaje de gastos de administración, en virtud del cual se ha cumplido todas las obligaciones derivadas de la administración de los aportes obligatorios del demandante, los cuales incluso le generaron rendimientos de forma positiva en su cuenta de ahorro individual. En lo que corresponde al

porcentaje de los aportes con destino a los seguros de invalidez y sobrevivencia, destacó que esos dineros fueron trasladados a las respectivas aseguradoras contratadas Skandia, quienes brindaron la cobertura durante todo el tiempo de afiliación frente a los riesgos de invalidez y muerte, es decir, cumplieron la finalidad establecida en la ley, por lo que tampoco resulta pertinente una eventualmente devolución de dichos montos.

Finalmente, frente al llamamiento en garantía resaltó que la entidad llamada a realizar la devolución de la prima de seguros es la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., quien fue la que recibió la prima pagada por Skandia, pues al retrotraer los efectos de la afiliación al RAIS, el contrato de Seguro Previsional también sería parcialmente ineficaz a la luz del artículo 1137 del Código de Comercio y, en consecuencia, la entidad aseguradora estaría obligada a devolver las primas pagadas.

### **2.3.3 PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.**

En primer lugar, resaltó que no existían razones fácticas y jurídicas para declarar la ineficacia del traslado, pues la decisión se tomó de forma espontánea y sin presiones, cumpliendo los requisitos exigidos por la normatividad vigente (artículo 97 del Decreto 663 de 1993), y después de brindar la información necesaria, y obligatoria para la época. Destacó que el accionante no cumplió su deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios, lo cual conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar, más aún, cuando contó con varias oportunidades para trasladarse nuevamente de régimen y no lo hizo, ratificando su interés en mantenerse vinculada al RAIS.

Adujo que la motivación de la parte actora para retornar al RPM, es el carácter económico de la mesada pensional, mismo que no podía ser determinado en el momento en el que se presentó su vinculación, al depender de muchas variables que no eran conocidas en su momento, razón por la cual, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó que la sola circunstancia de no cumplirse las expectativas pensionales no puede predicarse como un engaño.

Destacó que la prueba documental que extraña la juez de primera instancia en su fallo, frente a aquellos documentos que acrediten la entrega de información, no era una obligación vigente para el momento del traslado de la parte actora, pues esta obligación surgió con la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia financiera de Colombia, aunado a que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación surgieron a partir del año 2010 y 2014, por lo que no es cierto que la AFP se encuentra en una mejor posición probatoria que acredite lo solicitado, y mucho menos debe exigirse su aplicación de manera retroactiva.



En caso de confirmarse la decisión de primera instancia, solicitó que no se condene al traslado de los aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, considerando que los gastos de administración tienen por mandato legal una destinación específica que se encuentra en el artículo 20 de la ley 100 de 1993, aunado a que estos descuentos han cumplido plenamente con su cometido y no se encuentran en el patrimonio de la AFP, pues se han destinado a cubrir los gastos en que se incurrió, para la generación de frutos o rendimientos que hoy se ven de manera positiva en la cuenta del accionante y para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte. Destacó que la orden de traslado constituye un enriquecimiento sin causa debido a la inaplicación de las normas legales que regulan las restituciones mutuas derivadas de una nulidad o ineficacia de un acto jurídico, además de transgredir el principio de sostenibilidad financiera. Aunado a lo anterior, destacó que no es procedente ordenar la indexación de las condenas, pues la pérdida adquisitiva de la moneda se resarciría con los rendimientos financieros generados.

Finalmente, con relación a las costas procesales, indicó que no es procedente por cuanto la entidad siempre obró con buena fe objetiva, y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época del traslado.

#### **2.3.4 PRESENTADOS POR MAPFRE S.A.**

En primer término, destacó que la entidad no tuvo injerencia alguna en los hechos y en consecuencias del traslado de régimen del actor, sin embargo, consideró que no se configuró ninguno de los presupuestos para declarar la ineficacia del acto de afiliación del demandante, pues de manera reiterada manifestó su voluntad e intención de permanecer en el RAIS.

Respecto a la devolución de las primas de seguro, destacó que son un hecho agotado y superado, pues fueron primas que se causaron en su totalidad, ya que con anterioridad la aseguradora estuvo soportando los riesgos por todo el tiempo en que se hayan pagado las primas.

Finalmente, destacó que conforme a la jurisprudencia de la CSJ, las aseguradoras son terceras de buena fe, que en nada tienen que ver con la presunta falta de información en la que podrían incurrir las AFP, y por ende, no deben ser afectadas en tanto no tienen intervención o injerencia en ello.

### **3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo con lo planteado en los recursos de alzada, se establecerá si es dable declarar la ineficacia de la afiliación del demandante a la sociedad administradora de fondo de pensiones a través de la

cual se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, analizando lo atinente a la aplicabilidad de lo que en torno al tema ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. En caso afirmativo se determinará qué haberes le corresponde retornar a COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A., SKANDIA S.A., y PROTECCIÓN S.A.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre, se examinará en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de apelación, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, disposición en virtud de la cual se faculta a este órgano a adicionar, aclarar y/o modificar la providencia en los ítems que resulten necesarios.

#### 4 CONSIDERACIONES

A juicio de esta Magistratura, y teniendo en cuenta lo planteado en el recurso de alzada, el corpus argumentativo que ha construido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para este asunto de la ineficacia de los traslados, se ha ido ampliando con el paso de los años. Es así como en la sentencia con radicado 31.989 de 2008, reiterada en las sentencias de radicación 31.314 del 09 de septiembre de 2008 y 33.083 del 22 de noviembre de 2011, la Corte abordó el estudio del asunto bajo el enfoque de la nulidad del acto, acontecida como consecuencia de un vicio en el consentimiento al suscribir los formularios de afiliación con los cuales se materializaba su traslado al RAIS, señalando que dicho consentimiento se afectó determinadamente por el engaño al que fueron sometidos por parte de los asesores de los Fondos de Pensiones demandados y que los llevó a tomar una decisión que iba contra sus intereses.

Posición que mudó posteriormente, para adscribirse a lo que ha denominado la ineficacia, cuando adujo que *solo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen, es que el juzgador podría avalar su transición; no se trata de demostrar razones para verificar sobre la anulación por distintas causas fácticas, sino de **determinar si hubo eficacia en el traslado***. (Sentencia con radicado 46.292 de 2014).

Desde un comienzo, la tesis de la ineficacia se ha apoyado en dos disposiciones normativas contenidas en la Ley 100 de 1993: el literal b) del artículo 13, que señala el carácter libre y voluntario de la elección del respectivo régimen y las posibles sanciones para quien atente contra ese derecho; y el artículo 271, donde se establecen las respectivas sanciones para quienes coarten esa libre selección al afiliarse y se indica que la misma quedará sin efecto.

Al desecharse la vía de la nulidad, ya NO es preciso acudir a lo normado en el art. 1750 del Código Civil, que contempla el plazo de cuatro años para interponer la acción de rescisión por nulidad relativa, ni tampoco resultó posible que con la re-asesoría que los Fondos privados brindaban en muchas ocasiones, se pudiera convalidar ese traslado original.

Por las consecuencias que la Sala Laboral ha derivado de la ineficacia de los traslados al RAIS, resulta claro que ha optado por la ineficacia por inexistencia del acto jurídico, en este caso, por la ausencia total de consentimiento al momento de la afiliación o del traslado, siendo ese consentimiento un elemento de la esencia del negocio.

Punto en que la jurisprudencia del trabajo se ha explayado en razones para explicar cómo en los casos donde ha prosperado la declaratoria de la ineficacia, se ha estado en ausencia de un **consentimiento informado**, entendido como *un procedimiento que garantiza, antes que aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.* (Sentencia con radicado 68838 de mayo de 2019). Lo cual en ningún caso puede subsanarse con la firma en señal de aceptación en un formato previamente determinado por la AFP.

Ese deber de información ha estado presente desde la creación del Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia. E incluso desde antes. En efecto, el Decreto 663 de 1993, «Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», aplicable a las AFP desde su creación, prescribió en el numeral 1° del artículo 97, la obligación de las entidades de «suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

La propia Corte, en la sentencia 68.838, multireferenciada, elabora un cuadro que intenta mostrar la evolución normativa en la materia. Así:

<b>Etapas acumulativas</b>	<b>Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información</b>	<b>Contenido mínimo y alcance del deber de información</b>
Deber de información  <b>ETAPA EN LA QUE SE ENCONTRABA EL DEMANDANTE</b>	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información,	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes

asesoría y buen consejo		pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Se exige entonces una índole de consentimiento tan específico por parte de un afiliado, que una mínima variación en el proceso de asesoría comporta la declaración de que hubo ausencia total de consentimiento y, por lo mismo, ineficacia por inexistencia del acto jurídico.

Pero, además, al invertirse la carga de la prueba, le basta al actor afirmar que no obtuvo la información adecuada cuando transitó entre los regímenes, para que sea el fondo de pensiones el que deba desplegar la actividad probatoria necesaria para demostrar ese cabal acompañamiento. En tal sentido, se insiste, ni el paso del tiempo impide accionar contra un acto que no existió ni la oportuna re-asesoría, cuando ella se presenta, puede sanear lo que feneció al nacer.

Un párrafo de la pluricitada sentencia 68.838 de 2019 es elocuente:

De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y SL1452-2019, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

La mirada censora de la Corte sobre estos procedimientos de las AFP se ha ido ampliando, desde los afiliados que tenían el beneficio de transición o estaban próximos a pensionarse, hasta toda clase de afiliados. Este último fallo lo reafirma:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo.

Así las cosas, tanto del recuento realizado como del interrogatorio absuelto por el demandante, se desprende, de un lado, que para la época del traslado inicial al RAIS, concretamente el 1 de abril de 1997, fecha en la cual suscribió el formulario de afiliación a Horizonte hoy Porvenir S.A (fl 22 del archivo 17 del expediente digital), existía la normatividad ya citada que aludía la existencia de un **deber de información**, y de otro lado, que escaso era el conocimiento que tenía el actor respecto del

funcionamiento de ambos regímenes, estando el traslado en su momento motivado por la ausencia de una asesoría integral en donde se indique las características del RAIS, las consecuencias, ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen pensional.

Y es que expresamente el señor JULIO CESAR PALACIO CORREA, en el aludido interrogatorio expuso que su nivel de estudios era profesional, y que labora en la gerencia de inteligencia de mercados en la empresa Nutresa. Respecto al traslado a Horizonte hoy Porvenir S.A, adujo que, en su puesto de trabajo lo visitaron asesores de la AFP, quienes le indicaron que era la mejor opción, y que obtendría mejores rendimientos que le iban a permitir tener una mejor pensión, sin ahondar en el caso específico. Destacó que no le hablaron de conceptos como: rendimientos financieros, cuenta de ahorro individual, características del ISS, y pensión anticipada.

Respecto a la movilidad efectuada a Protección S.A., indicó que un asesor comercial se ofreció a ayudarlo con el proceso de jubilación y a resolver algunos vacíos en su historia laboral, considerando así una mejor alternativa que desembocó en la afiliación a dicho fondo. Aclaró que le hablaron de la posibilidad de hacer aportes voluntarios.

Respecto a la movilidad efectuada a Skandia S.A., destacó que su afiliación se dio en búsqueda de la solución al problema que aún tenía en su historia laboral, pues el asesor comercial de Skandia, de igual forma le indicó que le podía ayudar con ese trámite.

Respecto a la movilidad efectuada a Colfondos S.A., indicó que al igual que los anteriores asesores comerciales, una de estas personas acudió a su oficina prometiendo brindar ayuda con los vacíos de su historia laboral, y además indicándole que tendría mejores opciones pensionales.

Respecto al traslado efectuado a Porvenir S.A., indicó que igualmente se dio en búsqueda de una solución al problema de su historia laboral.

Resaltó que la motivación para retornar al RPM, es la diferencia en la cuantía de la mesada pensional, pues no le parece justo recibir el 17% de lo que constituye su salario en dicha data.

Destáquese que el deponente NO aceptó tener una formación en seguridad social de la que pudiese predicarse una comprensión del tema, máxime cuando ni siquiera se acreditó la existencia de una explicación completa por parte del asesor.

En todo caso, en gracia de discusión, lo cierto es que no se vislumbra una suficiente ilustración, ni siquiera en asuntos tan relevantes como aportes voluntarios, pese a la trascendencia de este aspecto

en la obtención de una pensión en un monto mayor en contraste con la que percibiría del régimen de prima media, máxime si este es uno de los atractivos con los que más se publicita este sistema; tampoco se le habló de modalidades de pensión, la posibilidad de acceder a una garantía de pensión mínima, los requisitos para causar la prestación por vejez en uno y otro régimen, las principales diferencias de cada uno, lo atinente a la redención del bono pensional y ello sólo por mencionar algunos aspectos que debieron ser abordados en esa reunión inicial. Pero nada de ello se dijo, o por lo menos no se acreditó.

Tampoco existían las herramientas financieras o la tecnología para realizar algún tipo de cálculo, de ahí que esta Sala cuestione la dificultad para establecer, en aquella época, cuál régimen le era más favorable a una persona, pues realmente el monto de la pensión es uno de los aspectos que tiende a inclinar la balanza a la hora de la escogencia de un fondo, prestación en un principio depende de un capital mínimo exigido, punto que NO ERA clarificado en forma suficiente para efectos de que una persona entendiera que de NO alcanzar el ahorro necesario NO se pensionaría, o por lo menos que la prestación dependía del capital acumulado en toda la vida laboral, aunado a la incidencia de factores externos impredecibles a futuro (composición del grupo familiar, fluctuación de los IBC y variación del mercado, etc) haciéndole un estimativo de cuánto dinero se requería sólo para financiar un salario mínimo, panorama bajo el cual entendería la necesidad de planear su futuro pensional para acceder a una cuantía mayor, pero tal aspecto también se omitió, o por lo menos, se insiste, no se acreditó lo contrario.

Empero, lo antes expuesto no debe comportar un foco de distracción, pues era a la administradora del RAIS y no a la parte actora, a la que le correspondía probar, como se indicó, que con antelación al diligenciamiento del formulario de traslado mediaba un consentimiento informado, el que en el caso aquí analizado se echó de menos. Ello aunado a que ninguna confesión podría desprenderse de la versión dada por el accionante, pues se insiste, ni siquiera le explicaron las ventajas y desventajas de cada régimen.

Así las cosas, acogiendo los postulados sentados por nuestro órgano de cierre, se **CONFIRMARÁ** la decisión en este punto.

Ha de agregarse que ninguna variación genera la **MOVILIDAD** entre diferentes administradoras del RAIS que se presentó en el caso del señor PALACIO CORREA, quien en 1997 se vinculó a Horizonte, comenzando su ampliá trasegar por Protección, Colfondos, Skandia y Porvenir conforme se aprecia en el reporte del SIAFP (fl. 21 del archivo 17 del expediente digital), siendo Porvenir S.A. el fondo donde actualmente permanece desde el último cambio efectuado en el año 2011. Lo anterior por cuanto, de un lado, importa examinar lo acontecido al momento de cambiar de régimen, y de otro

lado, cuando hay movilidad entre fondos privados, la asesoría NO suele referirse a las características del sistema de prima media, mucho menos a las implicaciones del cambio de sistema pensional, dado que son otras circunstancias las que se resaltan; no es lo mismo promover el cambio de una administradora a otra, a promover un cambio de régimen pensional, pues en el primer caso, por regla general, sólo se publicita la rentabilidad de uno u otro fondo, lo que a voces del demandante, fue precisamente lo que sucedió, aunado a las promesas de subsanar los vacíos que presentaba la historia laboral de la parte demandante.

En todo caso, si las AFP incumplieron su deber de información y por consiguiente debe declararse la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, esa determinación implica privar de todo efecto práctico al traslado, por lo que mal haría esta Magistratura en siquiera pensar o asimilar una MOVILIDAD entre administradoras del RAIS, a una convalidación, por definirlo de alguna manera, de un acto jurídico que nunca existió.

Fue precisamente este el raciocinio de la Sala de Casación Laboral en sentencia de radicación SL4705-2021, cuando recalcó que:

En consonancia con lo antes señalado, debe resaltar la Corte que, desde la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, se ha sostenido que, una vez acreditada la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, **el acto jurídico no se torna en eficaz por los cambios que los afiliados hagan entre administradoras privadas** lo que ha sido reiterado entre otras en las providencias CSJ SL2877-2020, CSJ SL1942-2021 y CSJ SL1949-2021

El anterior criterio es el que se encuentra vigente en la jurisprudencia de la Sala; motivo por el cual se recoge cualquier otro que le sea contrario y, frente a la cual se advierte que, como la declaratoria de ineficacia del traslado tiene como sustento el incumplimiento del deber de información en el traslado inicial, **al estar afectado el acto jurídico primigenio, los negocios jurídicos subyacentes adolecen de igual afectación**, entre ellos los traslados que se efectúen a los diversos fondos privados, ello en tanto que, el efecto de la declaratoria de ineficacia es volver al statu quo, lo que implica retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el cambio de sistema pensional no hubiera existido jamás (CSJ 4025-2021, CSJ SL4062-2021, CSJ SL 4064-2021, entre muchas otras).

Luego entonces, para la Sala es claro que, en el presente asunto ni de la afiliación inicial, como tampoco de los traslados posteriores entre los diferentes fondos privados se evidencia que se hubiese recibido una información integral, completa y oportuna que brindara una ilustración respecto de las características, condiciones del mercado, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las contingencias financieras que tal decisión supondría en su derecho o como se dijo en la sentencia CSJ SL 6 oct.2021, rad.83576 « no prueba por sí mismo y mucho menos genera una especie de presunción relativa a que la voluntad reflexiva de la persona afiliada al materializar su acto de traslado de régimen pensional y de los posteriores tránsitos entre administradoras estaban nutridos con la debida ilustración en los términos explicados, ni así lo ha previsto el legislador».

Por lo tanto, la Sala insiste y reitera que **el solo hecho de que el afiliado se traslade en varias oportunidades dentro del RAIS, no puede convalidar, ni suplir el incumplimiento del deber de información por parte de la AFP al momento del traslado inicial** y los traslados posteriores, así como tampoco resulta ser evidencia de que el afiliado fue informado debidamente en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia y, menos aún puede considerarse que dicha circunstancia modera las consecuencias que ello supone en la eficacia del acto jurídico celebrado; todo esto bajo el contexto de que en el proceso quede por establecido que efectivamente el demandante no fue debidamente informado. (Resaltos de la Sala)

De otro lado, ha de precisarse que la aludida ineficacia no sólo implica el retorno de los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual del demandante, dígame aportes obligatorios, rendimientos, entre otros, sino que además acarrea a todas las administradoras del RAIS accionadas, trasladar a Colpensiones E.I.C.E todos los valores que hubieren recibido con motivo de la afiliación, en los términos referidos por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicación 31.989, providencia donde la Sala de Casación Laboral adujo que la administradora debía asumir con cargo a su propio patrimonio, los deterioros sufridos por el bien administrado, incluyendo los gastos de administración en que hubiere incurrido, concepto que abarca los costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima de acuerdo a lo previsto en el art. 20 de la Ley 100 de 1993, punto en el que se **CONFIRMARÁ** la sentencia de primera instancia.

Y es que cuando se presenta MOVILIDAD, es decir, la persona se traslada entre distintas administradoras del RAIS, se considera necesario señalar que tal obligación respecto de los valores a retornar NO debe recaer exclusivamente en cabeza de la última entidad afiliadora en que estuvo, como en este caso lo es Porvenir S.A., ni mucho menos se circunscribe al tiempo en que la persona estuvo en ese último fondo, de ahí que el retorno de los gastos de administración se extienda respecto de la época en que permaneció en Protección S.A., Skandia S.A, y Colfondos S.A.

Y es que la Sala de Casación Laboral, de cara a los efectos de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, ha sido pacífica en que ello trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración, razonamiento plasmado, entre otras, en la sentencia de radicación 85325 noviembre de 2020, cuando señaló que:

“(…) genera, como consecuencia, la de retrotraer la situación al estado en que se encontraba como si el acto nunca hubiera existido, es decir, se debe hacer la ficción de que el traslado nunca ocurrió, lo que conlleva, por parte de las administradoras privadas, a trasladar a COLPENSIONES, el capital ahorrado junto con los rendimientos financieros, con los gastos de administración y comisiones con cargo a sus utilidades (al efecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de casación CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019)”

Y nuevamente en las sentencias de radicación 77.804 y 68.087 (M.P. Gerardo Botero Zuluaga) ambas de 2020, rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán



asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Tal pensamiento también fue reiterado en la sentencia 78.667 (M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo), cuando adujo que:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las *restituciones mutuas* contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional

(...) De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.

(...) Así, es claro que no le asiste razón al recurrente cuando refiere que «*las sumas depositadas en el fondo de garantía mínima no están en su poder*», debido a que el recaudo y manejo de las sumas destinadas al fondo de garantía mínima en el RAIS, en la actualidad, está a cargo de las administradoras de pensiones.

Y es que, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, debiendo garantizarse que COLPENSIONES E.I.C.E. reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que el demandante jamás se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputó a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES E.I.C.E., máxime si la ineficacia conlleva devolver las cosas a su estado original.

Empero, ello NO quiere decir que los rendimientos causados estén llamados a engrosar las arcas de la administradora del RAIS, pues si bien corresponden a unas utilidades acumuladas por años, generadas por las diferentes inversiones realizadas por los fondos privados en cumplimiento de la eficiente gestión que les impuso la ley, lo cierto es que dichos rendimientos son uno de los ítems que conforman la cuenta de ahorro individual, que como su nombre lo dice, pertenece al afiliado y cuando

este se traslada de régimen, los dineros depositados allí necesariamente pasaran al fondo común administrado por prima media.

Tal razonamiento también encuentra soporte en lo normado por el literal d) del art. 60 de la Ley 100 de 1993, según el cual el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora.

De otro lado, respecto a la indexación de los tres ítems que componen los costos de administración, esta Magistratura considera procedente **CONFIRMAR** el fallo, toda vez que, tal dinero (costos de administración, primas de seguros de invalidez y sobrevivientes, además del porcentaje destinado al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima), debe ser entregado a Colpensiones E.I.C.E debidamente indexado por parte de Porvenir S.A., Protección S.A., Skandia S.A. y Colfondos S.A., respecto del tiempo de permanencia en cada una y teniendo en cuenta como índice inicial el IPC certificado por el DANE a la fecha de pago de cada aporte y como índice final el vigente a la fecha de devolución aquí ordenada, aplicando la siguiente fórmula:  $\text{Indexación} = \frac{\text{índice final}}{\text{índice inicial}} \times \text{capital} - \text{capital}$ . Ello por cuanto una vez entre tal dinero al patrimonio de Colpensiones, el mismo se habrá visto envilecido por el paso del tiempo.

Ya la Sala de Casación Laboral se ha pronunciado sobre estos efectos, cuando indica que la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional trae como consecuencia para el fondo de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, la devolución con cargo a sus propios recursos de los gastos de administración debidamente indexados, posición que se puede consultar en las providencias SL4811-2020, SL3207-2020, SL1688-2019, SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710 y SL3349-2021.

También resulta necesario señalar que, conforme múltiples pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral, consúltense las sentencias de radicación SL4803-2021 y SL3710-2021<sup>1</sup>, al momento de cumplirse la orden impartida, las administradoras del RAIS accionadas deberán discriminar los conceptos entregados a Colpensiones E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, punto en el que se **ADICIONARÁ** el fallo proferido por el a quo.

---

<sup>1</sup> Concretamente dispusieron que: *Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.*

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema, **adicionándola** en el aspecto antes aludido.

Costas en esta instancia, a cargo de Porvenir S.A., Skandia S.A., y Colfondos S.A. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad y a favor del demandante.

**5 DECISIÓN DEL TRIBUNAL.**

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 27 de junio de 2023 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **JULIO CESAR PALACIO CORREA** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 71.636.799, en contra de **PROTECCIÓN S.A., SKANDIA S.A., COLFONDOS S.A., Y PORVENIR S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E.**

**SEGUNDO: ADICIONA** el numeral tercero de la providencia, bajo el entendido que las administradoras del RAIS accionadas **además deberán discriminar** los conceptos entregados a COLPENSIONES E.I.C.E., detallando en forma pormenorizada a que corresponden cada uno de los valores entregados, junto con el detalle de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A., Skandia S.A., y Colfondos S.A. Se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000 para cada entidad y a favor del demandante.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación.
Demandante:	<b>JULIO CESAR PALACIO CORREA.</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES E.I.C.E., y otros.</b>
Radicado No.:	05001-31-05-005-2021-00295-01.
Tema:	ineficacia traslado
Decisión:	<b>CONFIRMA Y ADICIONA SENTENCIA.</b>
Fecha de la sentencia:	<b>23/10/2023.</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 24/10/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario